



Poder Judicial de la Nación

## CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

**CAUSA N°16075/2021**

*Sentencia Definitiva*

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los \_\_\_\_\_, reunida la Sala Segunda de la Excelentísima Cámara Federal de la Seguridad Social para dictar sentencia en estos autos **IMA SERVICIOS INDUSTRIALES ARGENTINA S.A. c/ ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS s/IMPUGNACION DE DEUDA**, se procede a votar en el siguiente orden:

### **EL DOCTOR JUAN A.FANTINI ALBARENQUE DIJO**

IMA SERVICIOS INDUSTRIALES ARGENTINA S.A apela la Resolución 2021-1772 E-AFIP-DEIMPR#SDGTLSS0 **que no hace lugar a la impugnación y confirma la deuda determinada por la aplicación del Decreto 814/2001, períodos 7/2014 a 11/2017 y difiere la multa hasta tanto se dicte sentencia en la causa penal.**

La recurrente no efectúa el depósito previo de las sumas cuestionadas, (conf lo dispuesto por el artículo 15 de la ley 18820). **Acompaña póliza de seguro de caución** extendida `por Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. Plantea subsidiariamente la inconstitucionalidad de la norma.

Atento las constancias de autos, la envergadura de monto debatido y el seguro adjunto, considerado un sucedáneo valido del recaudo del depósito previo. ,( conf. criterio Alto Tribunal “ Orígenes AFJP S.A. C/ Administración Federal de Ingresos Públicos, sent del 04/11/2008), se habilita la instancia y se analiza el recurso impetrado.

Alega la recurrente que el organismo fiscal considera erróneamente que debería encuadrarse en el inc. a) del artículo 2 del Decreto 814/01, aplicando una alícuota del 21% en lugar de la alícuota del 17%, al tomar en cuenta el tope de facturación de \$48.000.000 que menciona el Decreto 1009/01, como la R.G.N°1095.

**Señala que es una PYME tal como se refleja en el Sistema Registral/Caracterizaciones Históricas.**

Manifiesta que el tope se fue ampliando a través de sucesivas normas , Resoluciones N° 675/02, 147/06, 21/10, 50/13, 11/16, 103/17, 154/18,519/2018,220/2019 .Afirma que no hay duda que la SEPYME es el organismo de aplicación encargado de definir los parámetros para que una empresa sea considerada micro, pequeña o mediana, así como tampoco hay discusión alguna ya respecto de la vigencia de la Resolución 24/2001 que sustenta el Decreto 1009/2001 y la R.G. 1095 en lo que la AFIP se escuda para desconocer el beneficio, que le corresponde.

Detalla en un cuadro la facturación, señalando que la empresa siempre estuvo en los períodos fiscalizados dentro de los parámetros para ser considerada PYME, a los efectos del Decreto 814/01, siendo aplicable la alícuota del 17%.



Alega que las leyes 24467 y 25300 no definen el concepto de PyME, sino que encomienda esa tarea a la autoridad de aplicación; por lo tanto la SePYME es la autoridad de aplicación para establecer si una empresa es PyME o no.

Cuestiona, asimismo, la infracción y los intereses.

El organismo, por su parte, analiza lo dispuesto por el Decreto N° 814/2001, el Decreto N° 1009/01, la Resolución General N° 1095/01.

Afirma que mientras el Decreto N° 814/01 fija las alícuotas de contribuciones patronales, el Decreto N° 1009/01 reglamenta esa disposición (estableciendo los requisitos de aplicación y remitiendo a la Resolución SPyME N° 24/01 sólo para definir los sectores abarcados y la forma de cálculo de sus ventas totales anuales); mientras que la Resolución General N° 1095/01 recepta ambos decretos a fin de reglar la conducta que deben adoptar los contribuyentes ante el Organismo para el ingreso de las contribuciones.

Señala que las Leyes N° 24.467 y N° 25.300 son las que establecen, respectivamente, el marco regulatorio y de fomento de las PyMEs. Sin embargo, ninguna de ellas define el concepto de PyME, limitándose a encomendar esa tarea a la autoridad de aplicación. Con ese fin, la Resolución SPyME N° 24/01 clasifica a las empresas según su tipo de actividad (entre ellas, servicios y comercio), define el concepto de “ventas totales anuales”, establece parámetros de cálculo de esas ventas y fija sus montos máximos (que luego fueron elevados por la Resolución N° 675/02 y la Disposición N° 147/06).

Afirma que el concepto de PyME “a los efectos de la determinación de la alícuota de contribuciones patronales” es el que surge del Decreto N°1009/01. No existe un concepto único de PyME que defina a dichas unidades productivas, sino que hay que considerar a cada uno de los regímenes vigentes, siendo el límite de \$48.000.000 la definición de PyME adoptada por el PEN en el Decreto N° 1009/01 para la aplicación del Decreto N° 814/01.

En síntesis, sostiene, salvo en lo que es materia de remisión expresa -que en relación al monto de \$48.000.000 no acontece-, el Decreto N° 1009/01 no resulta alcanzado por las modificaciones introducidas a la Resolución SPyME N° 24/01 por la Resolución N° 675/02 y la Disposición N° 147/06, manteniéndose incólume el importe allí establecido hasta tanto sea modificado por el PEN.

El beneficio de reducción de porcentaje de contribuciones patronales derivados del Decreto 814/01 se complementa con el Decreto 1009/01 que estableció la definición de PyMES, por remisión a la Resolución N° 24/2001, que a través de su art. 1° dispuso que serían consideradas micro, pequeñas y medianas empresas aquellas cuyas ventas totales expresadas en pesos no superen los valores por ella establecidos. Dichos montos, a posteriori, fueron actualizados en virtud de la Resolución 675/02 de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional.





Poder Judicial de la Nación

## CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

A su vez la Resolución 21/2010 en su artículo 1, señala a los efectos los importes de ventas para establecer como serán consideradas Micro Pequeñas y Medianas Empresas, un cuadro por sector. Situación que se reitera en las sucesivas Resoluciones dictadas.

En tanto el fundamento para elevar el tope fue la devaluación acaecida en nuestro país en diciembre de 2001, como es de público conocimiento, surge que el organismo actuante debió actualizar la R.G. 1095 en similar medida para adecuarla a una nueva definición cuantitativa de PyME pero no invocar una norma desactualizada para quitar el beneficio a empresas encuadradas como PyMES en la actividad comercial. Situación que por otra parte se continúa en sucesivos periodos posteriores.

En virtud de lo anterior, entiendo que el encuadramiento como PyME quedará esclarecido si la facturación arroja un monto inferior al límite fijado por las Resoluciones 675/2002, 147/2006; 21/2010; 50/2013, 357/2015, 11/2016, 103/2017, 154/2018 220/2019 y mod, que correspondan al periodo de cargo y con ello la tipificación de su situación para encontrarse alcanzada por el beneficio de reducción de contribuciones patronales derivado del Decreto 814/2001, art. 2 inc. b).

Lo antes expresado viene a coincidir con el criterio adoptado por la jurisprudencia de esta Cámara (ver Sala III SD.125.281 del 11/05/09 “Codimat SA c/AFIP-DGI s/Impugnación de deuda” y dictamen N° 25486/09 del Sr. Representante del Ministerio Público a cargo de la Fiscalía N° 2)

Cabe señalar que el Decreto 814/2001 fue reformada por la ley 27430. Asimismo, la Ley 27541 vigente desde el 23 de diciembre de 2019 introdujo una serie de modificaciones con respecto al cálculo y liquidación de las contribuciones patronales mediante la derogación del Dto. 814/01, Dto. 1009/01 y el Art. 173 de la Ley 27430.

Ello así, el análisis efectuado en estos actuados se acota al periodo de cargo. Revocándose la resolución recurrida en los términos indicados.

De acuerdo con lo señalado, es abstracto pronunciarse sobre el resto de los agravios.

En atención al modo como se resuelve, las costas se imponen al organismo, conforme art. 68CPCCN y criterio del Alto Tribunal en los autos "Cooperativa Eléctrica Azul Ltda. c/ Administración Federal de Ingresos Públicos CD.G.I.C" con fecha 5 de octubre de 2004, oportunidad en que el Tribunal modificó la doctrina de Fallos: 323:1557.

En cuanto a la regulación de los honorarios, corresponde al juzgador analizar la labor desarrollada por el profesional, tomando para ello en cuenta no sólo los montos cuestionados, sino también la complejidad de la materia debatida, la eficacia de las tareas y la extensión de los trabajos llevados a cabo por los letrados.

“La regulación no depende exclusivamente del monto del juicio o de las escalas pertinentes, sino de todo un conjunto de pautas previstas en los regímenes respectivos, que pueden ser evaluadas por los jueces con un amplio margen de discrecionalidad, entre las que



se encuentran la naturaleza y complejidad del asunto, el mérito de la causa, la calidad, eficacia y la extensión del trabajo (voto del Dr. Carlos S. Fayt).( CSJN T. 315 , P. 1620 )

En consecuencia, se tomara en cuenta la labor desarrollada por el letrado, la calidad, eficacia e importancia económica del proceso (Conf. Doctrina art. 1255 CCyCN y lo establecido por el Alto Tribunal en Establecimiento Las Marías S.A.C.I.F.A. c;/Misiones, Provincia de s/ acción, declarativa. Sent. Del 4 de septiembre de 2018)

Se propicia regular los honorarios de la dirección letrada de la parte actora en 344 UMA equivalente a \$ 3.096.344, tres millones noventa y seis mil trescientos cuarenta y cuatro pesos, (valor UMA, 9001 conf. Acordada 12/2022.).

Por lo señalado, propicio: Revocar la resolución impugnada con el alcance indicado. Imponer las costas al organismo (art. 68 CPCCN). Regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora en 344 UMA equivalente a \$ 3.096.344, tres millones noventa y seis mil trescientos cuarenta y cuatro pesos, (valor UMA 9001 conf. Acordada 12/2022.). Importe al que se adicionará el IVA en caso de corresponder. (cfr. Excma. C.S.J.N. en el fallo, “Compañía General de Combustibles S.A. s/ recurso de apelación “ sent. Del 16.06.03 Fallos 316,1533)

**EL DOCTOR WALTER F.CARNOTA DIJO**

Adhiero al voto del Dr. Fantini Albarenque

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, el Tribunal **RESUELVE:** Revocar la resolución impugnada con el alcance indicado. Imponer las costas al organismo (art. 68 CPCCN). Regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora en 344 UMA equivalente a \$ 3.096.344, tres millones noventa y seis mil trescientos cuarenta y cuatro pesos, (valor UMA 9001 conf. Acordada 12/2022.). Importe al que se adicionará el IVA en caso de corresponder (cfr. Excma. C.S.J.N. en el fallo, “Compañía General de Combustibles S.A. s/ recurso de apelación” sent. Del 16.06.03 Fallos 316,1533)

Regístrese. Protocolícese. Notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

LA DOCTORA NORA CARMEN DORADO NO VOTA POR HABERSE EXCUSADO.

WALTER F. CARNOTA  
Juez de Cámara  
(Subrogante)

JUAN A. FANTINI ALBARENQUE  
Juez de Cámara

ANTE MÍ: AMANDA LUCÍA PAWLOWSKI  
Secretaria de Cámara

MPV

